República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Veintidós de noviembre de dos mil veintiuno

RADICADO	05001 31 03 19 2021 00383 00
ASUNTO	No repone auto y concede apelación

1. OBJETO

Se procede a resolver el recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra el auto del 12 de noviembre de 2021 (Archivos 06 C.1.), por medio del cual se rechazó la demanda, bajo los argumentos expuestos en el escrito que milita en el Archivo 07 del C.1.

2. CONSIDERACIONES

Respecto a los requisitos que debe reunir una demanda para ser admitida, se observa que el Art. 82 del C.G.P., en sus numerales 4º y 5º, dispone que las pretensiones deben ser expresadas de forma precisa y clara; y que los hechos que fundamentan éstas deben ser expuestos de forma determinada, respectivamente.

Ahora bien, en cuanto a la precisión y claridad que se demanda de las pretensiones, se tiene que, a la luz de la RAE, el vocablo **preciso** denota aquello que es “*Perceptible de manera clara y nítida*”¹; y que el concepto de **claro** atañe a “*aquello que es “Inteligible, fácil de comprender*”². Por su parte, y respecto a la determinación que se depreca de los hechos, se observa que, acorde a la RAE, el verbo **determinar** alude a la acción de “*Señalar o indicar algo con claridad o exactitud*”³.

Adicionalmente, se observa que la **precisión, claridad y determinación** en la exposición de los hechos y pretensiones de la demanda configuran elementos constitutivos de las directrices trazadas en los numerales 4º y 5º Art. 82 del C.G.P.; y, adicionalmente, se tornan necesarios para la existencia de la **perfecta individualización de lo pretendido**; concepto procesal que “*...exige que el actor, al presentar el **petitum**, se apoye en una calificación jurídica precisa*”⁴; pretende honrar el presupuesto procesal de demanda en forma; y, a su vez, le garantiza al extremo pasivo un conocimiento claro sobre el efecto jurídico perseguido por su opositor.

¹ <https://dle.rae.es/preciso?m=form>

² <https://dle.rae.es/claro?m=form>

³ <https://dle.rae.es/determinar#DaOWspV>

⁴ QUINTERO, PRIETO. Beatriz y Eugenio. Teoría General del Derecho Procesal. Cuarta Edición. Editorial TEMIS, Págs. 432-433

Finalmente, se advierte que el numeral 7° del Art. 90 del C.G.P., establece que el no acreditar el agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad constituye una causal de rechazo de la demanda.

2.1. Caso concreto. Una vez analizados los supuestos fácticos que permean el presente asunto, así como los fundamentos jurídicos que los regulan, el Juzgado advierte que no le asiste razón al impugnante en cuanto a sus dichos, en atención a las siguientes consideraciones:

En primer lugar, y pese a que el recurrente se duele de una supuesta exigencia indebida desde el auto inadmisorio de la demanda, es necesario precisarle que lo requerido por el Juzgado se cimentó en los artículos 82 y siguientes del Código General del Proceso. Tan es así, que la demanda inicialmente presentada adolecía de serios inconvenientes formales como por ejemplo lo atinentes a frutos, su cuantificación, el respectivo juramento estimatorio, etc. Y dichos aspectos debieron ser modificados por el hoy inconforme como se evidencia en el escrito de subsanación. De ahí que no resulte de recibo lo alegado.

Precisado lo anterior, y en lo que respecta de forma puntual a las causales de rechazo, se analizará en primer lugar lo referente al requisito de procedibilidad. En torno al reproche expuesto frente al agotamiento del requisito de procedibilidad, se observa que en el auto de rechazo el Juzgado fue claro al exponer las razones por las cuales requirió la constancia de dicho agotamiento, así como los fundamentos normativos de ello. En ese sentido, se reitera que, en el presente caso, y a la luz de lo trazado en el numeral 7° del Art. 90 del C.G.P. y en el art. 590 del mismo Estatuto, dicho requisito es procedente y, por ende, se reafirma la posición respecto a la necesidad de que los bienes sobre los cuales han de recaer las medidas cautelares deben ser de propiedad de la parte pasiva, y no del mismo demandante, beneficiado con ellas.

En este aspecto, se resalta que la parte en modo alguno ofreció un fundamento legal, y puntual para desvirtuar lo dicho por esta Judicatura sobre la finalidad de la disposición contenida en el inciso 2° del literal a) del numeral 1° del Art. 590 del C.G.P. y, por tanto, sobre la interpretación que el Despacho hizo en torno a tal disposición. Al efecto, se remite nuevamente a lo dicho en cuanto a este punto en el auto de rechazo, ya que en él se indicó claramente que *“De cara a la justificación dada por el actor, el Juzgado concluye que ella no es de recibo, por cuanto el texto de la norma no puede ser asimilado de forma aislada y descontextualizada. Además, el hecho de que en el inciso 2° del literal a) del numeral 1° del Art. 590 del C.G.P. el legislador hubiese establecido que “Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso.”, permite ratificar la idea sobre la necesidad de que el demandado posea la titularidad de los bienes respecto de los cuales recaerán las medidas cautelares, pues no tendría sentido que, **dada la naturaleza y repercusiones que implica una medida cautelar, el dueño de los respectivos***

bienes, y que además detenta la calidad de demandante, vea afectados sus propios bienes e intereses con un secuestro.”

Es del caso señalar que la medida cautelar de inscripción de la demanda solicitada busca dar publicidad sobre la contienda cernida sobre un bien, la cual, si bien *no coloca los bienes fuera del comercio, en la práctica determina inmovilización jurídica de ellos puesto que los sujetos de derecho son poco afectos a adquirir bienes con litigios pendientes y si lo llegan a hacer el precio se reduce drásticamente por la incertidumbre que existe respecto de la suerte final de aquellos, de donde se observa los graves perjuicios que la medida puede ocasionar(...)*⁵

En ese sentido, no puede colegirse la viabilidad de medidas como la inscripción de la demanda sobre los bienes de quien demanda, máxime que no está en juego el derecho real de dominio y que ello acarrearía en la práctica la inocuidad del requisito de procedibilidad. Por ende, se reitera la necesidad del agotamiento del requisito.

De tal forma, se itera, no puede analizarse la norma de un modo descontextualizado y aislado, ni mucho menos ajeno a lo que constituye en esencia el concepto medida cautelar dentro del procedimiento jurisdiccional. Esto, máxime cuando la Corte Suprema de Justicia ha expresado la inviabilidad de este tipo de medidas en los trámites reivindicatorios⁶.

Ahora, de cara a lo argüido por el recurrente frente a la falta de obligatoriedad de las sentencias que el Despacho citó para sustentar su decisión, se le pone de presente a aquél que, sin el ánimo de entrar en una polémica sobre lo que constituye o no un precedente jurisprudencial, la citación se efectuó como respaldo a la posición que esgrime el Juzgado desde la comprensión del mismo artículo 590 del CGP y que da cuenta de la improcedencia de la medida cautelar en los términos requeridos por el recurrente para soslayar indebidamente el requisito de procedibilidad.

En ese sentido, no hay lugar a reponer lo establecido por el Juzgado sobre la conciliación preprocesal como requisito previo en este caso.

Respecto al reproche hecho sobre la exigencia atinente a la precisión y claridad entorno a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se ha desarrollado la posesión del bien inmueble cuya reivindicación se depreca; así como a la naturaleza de los actos de posesión presuntamente desplegados por las demandadas (requeridas en el numeral 3 del auto indamisorio), se reitera que la parte actora no cumplió con tal exigencia, pues en el escrito de subsanación se limitó a indicar la fecha de inicio de la posesión alegada, pero no expuso con determinación los actos de posesión supuestamente desplegados por la

⁵ Código General del Proceso. Parte Especial. DUPRE Editores. Bogotá. 2017. Pág. 1059.

⁶ STC 8251 de 2019 del 21 de junio de 2019, STC6347-2018, STC10609-2016

parte pasiva y, por ende, no delimitó ni clarificó las razones por las cuales se considera que las demandadas tienen la calidad de poseedoras.

Lo anterior indudablemente está ligado con la debida presentación de los hechos de la demanda, dado que estos deben ofrecer un escenario determinado y claro en aras de su comprensión por parte del Juzgado y de la misma contraparte. Los hechos no pueden presentarse de cualquier modo, ni mucho menos indeterminados.

En este punto, se hace énfasis en que la exigencia del Despacho se hizo teniendo en cuenta que en el libelo demandatorio se aludió a la existencia de una tenencia en cabeza de la parte accionada sobre el inmueble trabado en la *Litis*, y posteriormente, y de manera abrupta, se planteó un escenario de posesión existente a partir del 31 de julio del presente año, sin que, se itera, se explicase de forma determinada y coherente la forma en que se dio dicha mutación y, en consecuencia, las circunstancias de modo sobre el particular. De ahí que, en atención a la claridad y precisión que exige el Art. 82 del C.G.P., esta Judicatura mantenga su posición sobre el incumplimiento en el que incurrió la parte actora respecto a este tópico.

Por otro lado, y frente a lo aducido por el impugnante en cuanto a la supuesta vulneración del derecho a acceder a la administración de justicia, ha de precisarse que si bien el Art. 229 de la C.P. consagra dicho derecho como una garantía constitucional fundamental, lo cierto es que la existencia de tal prerrogativa no implica *per se* que los titulares de la misma puedan exonerarse de cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las normas de rango legal, tal y como lo serían, en este caso, los supuestos normativos contemplados en los numerales 4° y 5° Art. 82 del C.G.P. y en el numeral 7° del Art. 90 del citado Código, cuya satisfacción se tornaba indispensable para poder acceder a la administración de justicia.

Así las cosas, y al evidenciarse la inobservancia de las directrices trazadas en los numerales 4° y 5° del Art. 82 del C.G.P. respecto a la **precisión, claridad y determinación** en la exposición de los hechos de la demanda; y, en consecuencia, al no evidenciarse la presencia de una perfecta individualización de lo pretendido, según lo explicado, no es viable proceder con la admisión de la demanda en los términos solicitados por la parte actora, máxime si se tiene presente que dicha parte no sólo obvió las mencionadas directrices, sino que también desconoció preceptos como los contemplados en el numeral 7° del Art. 90 del C.G.P..

Finalmente, y por ser procedente, se concederá, **en el efecto suspensivo**, el recurso de apelación interpuesto de forma subsidiaria, el cual deberá surtirse ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín.

En virtud de lo expuesto, el Juzgado,

RESUELVE:

Primero. No reponer el auto del 12 de noviembre de 2021 (Archivos 06 C.1.), por medio del cual se rechazó la demanda, en atención a las consideraciones hechas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Conceder, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto de forma subsidiaria, el cual deberá surtirse ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín.

Tercero. Para los efectos previstos en el anterior numeral, remítase a la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín la totalidad del expediente virtual.

NOTIFÍQUESE

**ÁLVARO ORDÓÑEZ GUZMÁN
JUEZ**

4

Firmado Por:

**Alvaro Eduardo Ordoñez Guzman
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 019
Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **56b3c80b334f56f1ccc534ae4e53159ae49fa0b9614bd9b2eb8fc081c0f49e65**
Documento generado en 22/11/2021 12:29:29 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>